

Fortalezas y debilidades de la organización campesina en el contexto de la transición política

Hubert Carton de Grammont*

Es notorio que desde el fin de las políticas proteccionistas en México, la apertura de sus mercados y el retiro del Estado de la conducción de la economía, las organizaciones campesinas han perdido su capacidad de influir en las políticas públicas. Esta debilidad se debe tanto a la disminución de la participación del campesinado en el PIB agropecuario, como a su debilitamiento social frente a la población urbana que representa hoy la enorme mayoría de la población nacional. Es por esta doble situación que el Estado abandonó, en las últimas décadas del siglo pasado, la ideología agrarista que fue el sostén del régimen corporativista del Partido Revolucionario Institucional y rompió su tradicional alianza con el campesinado. Esto provocó importantes reajustes entre las organizaciones sociales, el Ejecutivo y los partidos políticos. En este trabajo analizamos algunos rasgos de la actual relación de las organizaciones campesinas con la esfera pública en el contexto del nuevo régimen político en vigor.

El carácter social de la población rural: los hogares campesinos y los hogares no campesinos

A lo largo del siglo xx se consideró que en el campo vivían campesinos, pequeños agricultores, latifundistas y jornaleros agrícolas¹. A aquellos que no tenían tierra se les consideraba “campesinos sin tierra” o “campesinos

con derechos a salvo” por ser posibles beneficiarios del reparto agrario. La importancia de la ideología revolucionaria agrarista nutrida por la enorme capacidad de los campesinos por obtener la tierra, a pesar de la oposición férrea de los latifundistas o caciques locales, daba la impresión que el reparto era inagotable. Los campesinos empobrecidos o “sin tierra” que no podían vivir más en el campo, migraban a la ciudad, alimentando las ciudades perdidas de las periferias de las metrópolis. Las personas que vivían en el campo sin ser productores agropecuarios, trabajaban localmente o en las pequeñas urbes circunvecinas en el sector manufacturero y de servicios. No se tenían datos suficientes para cuantificar esta situación de ma-

nera precisa, pero podemos suponer que esta visión era cercana a la realidad, ya que en 1970 el 77% de la población económicamente activa del campo trabajaba en el sector primario, mientras que sólo 18% se ubicaba en el secundario o en el terciario (Censo de Población, 1970).

Sin embargo, en las dos últimas décadas del siglo pasado se transitó de una sociedad agraria en la cual predominaba el sector agropecuario, a una sociedad rural en donde no sólo coexiste este sector con otras actividades económicas, sino que la agricultura es la actividad menos importante tanto en términos de la población económicamente activa involucrada, de la participación de los hogares y del ingreso obtenido. Hubo un acelerado

* Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

¹ Utilizamos como sinónimo “campo” y “rural”. Para delimitar este espacio geográfico y social nos atenemos a la definición de la población rural del INEGI (localidades con menos de 2,500 habitantes).

proceso de “desagrarización” del campo no por la desaparición de la actividad agropecuaria, como se argumenta a menudo, sino por el impresionante crecimiento de los ingresos no agrícolas en los hogares rurales.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en 1992, 65% de los hogares rurales eran campesinos, el resto (35%) no lo eran (cuadro 1). Poco más de una década después, en 2004, constatamos que la situación cambió drásticamente ya que sólo 31% de los hogares son campesinos, el resto (69%) no lo son. Esto se debe a un doble proceso: la fuerte disminución de los hogares campesinos (en 1,002,798) por la crisis de la agricultura y la consecuente concentración de la producción², mientras el número de hogares no campesinos se incrementó de manera impresionante en más de 1,5 millones por el famoso “baby boom” de los años sesenta-setenta y el desgaste de las migraciones definitivas que provocó una mayor permanencia de la gente en el campo.

Hace dos décadas, todavía la mayoría de los hogares eran campesinos, aún si parte de la familia campesina trabajaba fuera de la agricultura. Hoy sólo una tercera parte de los hogares rurales son hogares campesinos, el resto son hogares de asalariados u ocasionalmente hogares con pequeños comercios, actividades artesanales o de oficios. En muchos casos y cada vez más, son hogares de migrantes.

Cuadro 1
Número de hogares campesinos y no campesinos en el campo (localidades de menos de 2500 habitantes), 1992-2004

Tipo de hogar	1992		2004	
	No. de hogares	%	No. de hogares	%
Hogares campesinos	2,821,311	65	1,818,513	31
Hogares no campesinos	1,533,950	35	4,105,554	69
Total de hogares rurales	4,355,262	100	5,924,067	100

Fuente: ENIGH, INEGI, 1992-2004. Elaboración propia.

Si analizamos brevemente los ingresos de los hogares campesinos (Cuadro 2), vemos que la importancia de los ingresos monetarios agropecuarios en los ingresos totales del hogar disminuyó notablemente (41% a 27%) así como el autoconsumo (10% a 5%), mientras que el valor de los

² En la medida en que la superficie cultivada no ha variado en estos años, la hipótesis de una fuerte concentración de la producción en unidades fuertemente capitalizadas se impone. Por desgracia el censo agropecuario de 2001 no se ha levantado, por lo cual no tenemos una idea precisa de la actual estructura agraria.

demás ingresos se incrementó: el salario pasó de 28% a 31%; las actividades propias no agrícolas (artesanía, talleres, tienditas, etc) pasaron de 6% a 10%; finalmente, los subsidios y las remesas se incrementaron notablemente, pasando los primeros de 0.2% a 13% y las segundas de 3% a 7%.

Cuadro 2
Evolución de los ingresos de los hogares campesinos en localidades de menos de 2,500 habitantes, 1992-2004

Fuente de ingreso	1992	2004
Ingresos agropecuarios monetarios	41	27
Autoconsumo	10	5
Salarios	28	31
Actividades propias no agrícolas	6	10
Subsidios (Procampo y Progresas)	0.2	13
Remesas	3	7
Otros	11	6
Total	100	100

Fuente: ENIGH, INEGI, 1992-2004. Elaboración propia.

Hace dos décadas la agricultura representaba la mitad del ingreso total de los campesinos, y hoy representa sólo una tercera parte. El ingreso asalariado así como las actividades propias no agrícolas, se incrementaron poco, mientras que las remesas y los subsidios crecieron en forma notable. Estos datos indican que no sólo numerosos hogares campesinos desaparecieron, sino que los que subsisten dependen cada vez menos de la agricultura y cada vez más de la pluriactividad.

Los cambios provocados por estas nuevas dinámicas económicas son tan fuertes que la sociedad rural que conoce la nueva generación, anclada en pueblos marginados pero volcada hacia el mundo exterior por la migración, no se parece a la sociedad agraria de la generación anterior, que veía en la tierra, y en la lucha agraria, el principal medio para mejorar sus condiciones de vida. Los arquetipos de la vida rural que eran la parcela y la milpa se ven sustituidos por la migración y el trabajo asalariado precario. Estas transformaciones son tan profundas que parece justificado hablar del tránsito de un mundo campesino agrario dominado por la producción agropecuaria y la familia campesina, a un mundo rural en donde predomina el trabajo asalariado y la familia no campesina.

Obviamente, estas nuevas condiciones de trabajo en el campo tienen notables consecuencias sobre la definición de los campesinos y de los no campesinos (o pobladores del campo) como clase social, sobre sus intereses a futuro,

sus posibilidades de organizarse en su carácter de productor de alimentos, sobre su relación con las organizaciones campesinas, o en su carácter de ciudadano y su relación con los partidos políticos. Queremos destacar un hecho concreto: las bases de las organizaciones sociales en el campo ya no se conforman esencialmente con campesinos sino con pobladores rurales que no tienen nada que ver con la producción campesina. Este fenómeno tiene mayor importancia en ciertas organizaciones que en otras: algunas mantienen en mayor medida su afiliación campesina (UNORCA, CNC), mientras que otras tienen bases tanto campesinas como no campesinas (la mayoría de las organizaciones). La forma de actuar de cada organización dependerá entonces de la composición social de sus bases. Existe una primera demarcación que las diferencia: si la base de la organización se conforma principalmente con campesinos mercantiles, sus demandas se enfocarán esencialmente hacia la Secretaría de Agricultura; si se conforma esencialmente con campesinos de autosubsistencia o con pobladores rurales, sus demandas se enfocarán esencialmente hacia la Secretaría de Desarrollo Social.

En síntesis, el mundo rural de hoy poco tiene que ver con el mundo rural de hace 20 años, porque su inserción en la sociedad se ha modificado profundamente. Su importancia social ha disminuido fuertemente, vive en un contexto diferente que plantea nuevas problemáticas. A continuación señalaremos algunos de estos nuevos problemas que se ubican en la esfera de la organización y de la política.

De la organización agraria corporativa al neocorporativismo

La construcción de las llamadas organizaciones campesinas “autónomas” es un fenómeno reciente, cuando mucho con dos décadas de experiencia. Desde el inicio de los años setenta numerosas organizaciones campesinas plantearon el principio de la “independencia” con respecto al partido en el poder y sus organizaciones, para expresar su voluntad de no entrar en componendas con el régimen corporativo autoritario. Sin embargo, la UNORCA, primera organización en plantear el principio de la “autonomía” para apuntalar su voluntad de trabajar con el gobierno, siempre y cuando se respetasen los procesos de autoorganización y autogestión de sus empresas, se creó en 1985. A partir de esta fecha ha tenido que adaptarse paulatinamente al largo proceso de transición política (C. de Grammont y Mackinlay, 2006). Estamos, entonces, frente a un proceso todavía en

construcción, inmaduro, en transformación, con titubeos y errores, en el cual apenas se van precisando nuevas definiciones ideológicas, proyectos políticos y visión del mundo, en el contexto de una transición democrática atribulada, inconclusa, incierta, a menudo cuestionada por su incapacidad tanto de respetar cabalmente las reglas y la ética democrática como de resolver los grandes problemas que aquejan a la sociedad, como son la pobreza, la inseguridad, la educación y el crecimiento económico.

Es notorio constatar que es durante la aplicación de las reformas estructurales neoliberales y la transición hacia la democracia, que se creó la mayoría de las organizaciones que existen actualmente. Su punto de arranque se encuentra en la lucha por la democracia, a menudo desde una posición radical que se explica por la falta de canales institucionales de participación y negociación, por la represión y por los procesos de exclusión social. Desde su origen muchas de estas organizaciones han luchado por la democracia como vía única para lograr la solución de sus demandas, y esto ha marcado en gran medida sus formas de organización y búsqueda de nuevas modalidades para ejercer la democracia interna. En muchos casos se vincularon con partidos políticos y en no pocos casos fueron creadas a iniciativa de éstos. Así, si bien pretenden ser autónomas de la esfera política, en la práctica dependen de ella, por lo cual su dinámica corresponde más a las necesidades de los partidos que a los intereses de sus bases sociales.

Cuando la transición política empezó a hacerse efectiva, a partir de las reformas electorales de 1996, las organizaciones campesinas autónomas empezaron a transitar de un posicionamiento basado en la organización social, a otro que buscaba combinar esta lucha con el ejercicio de la política partidaria activa. En un primer momento, que va hasta las elecciones presidenciales del 2006, son los dirigentes los que empezaron a negociar a título individual puestos y espacios en los partidos y a participar en la lucha electoral, conteniendo en diversos puestos de elección popular tanto a nivel municipal, y estatal como federal. En este período se insistía en la libertad individual de sus afiliados a adscribirse y votar por el partido de su preferencia. Sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales son las organizaciones mismas las que se comprometieron públicamente con los partidos políticos, incluso a través de desplegados en los periódicos, muy particularmente con el PRD (*La Jornada*, 08-08-2006, 12-08-2006, 01-11-2006, 06-12-2006), aunque hay que reconocer también que una misma organización puede apoyar diferentes partidos según las condiciones y preferencias de sus dirigentes locales. Así, por ejemplo, en

diferentes regiones del país la UNORCA apoyó simultáneamente a cada uno de los tres grandes partidos nacionales: el PAN, el PRD y el PRI.

En muchas organizaciones, más allá de los discursos o de las buenas intenciones, en vez de existir una relación de colaboración existe una relación de subordinación a los partidos políticos por lo cual hablamos de la presencia de un neocorporativismo en el campo. La falta de claridad en el vínculo que debe haber entre las organizaciones sociales y los partidos, es un problema mayor sobre el cual se reflexiona poco y no se vislumbra la posibilidad de establecer relaciones de efectiva autonomía con apoyos mutuos en torno a planteamientos programáticos conjuntos.

La des-ideologización de las organizaciones

Al contrario de lo que plantea la teoría del *rational choice*, creo que en los países desarrollados con tradición democrática la filiación a una organización social no se hace esencialmente de acuerdo a su eficacia para resolver los problemas de la gente, sino de acuerdo a sus posiciones ideológicas y políticas. Dicho con otras palabras, lo político tiene más importancia que lo social, la visión de sociedad une más que la resolución del problema individual, es la política la que define la vida de las organizaciones sociales (campesinas, sindicales o de cualquier índole), la visión del mundo decide la afiliación política y social. En una palabra, es la ideología la que determina la decisión de afiliarse a una organización.

En los países de América Latina la situación es diferente por dos razones: la falta de experiencia democrática (densidad democrática) y la agudización de la pobreza. Está combinación de poca experiencia democrática junto con la existencia de un amplio sector de la población en situación de pobreza y marginación, modifica la relación que existe entre la organización social y la vida política. Encontramos, entonces, una situación más polarizada. Por un lado, vemos una mayor radicalización ideológica que puede desembocar en posiciones guerrilleras; actualmente con el EPR y sus filiales (el caso paradigmático de esta situación es, sin duda, Colombia), pero recordemos que el EZLN empezó como guerrilla para transformarse paulatinamente en un movimiento social anti-partidario con “La otra campaña”. Por el otro, constatamos entre la población rural, campesina o no, la existencia de un fuerte pragmatismo determinado por la necesidad de la sobrevivencia.

Efectivamente, numerosos grupos que conforman las bases de las organizaciones campesinas esperan que éstas

les resuelvan sus necesidades más apremiantes sin importarles sus posiciones ideológicas o políticas. Ya no importa el otrora famoso programa político de las organizaciones sino que importa su eficacia para resolver problemas concretos. En este sentido, la organización acaba por vender un servicio, tal como lo puede hacer cualquier despacho de agrónomo o empresa de servicios. Pero hay que ser preciso: no se trata de una simple actitud oportunista como lo plantea el *rational choice*, sino que se trata de una necesidad impuesta por la vida misma; esta situación no se debe a las cualidades personales de las personas involucradas, sino a la situación en la cual viven. Es el binomio pobreza con marginación el que limita las posibilidades de implicarse en la lucha política partidaria, en tanto que la gente se encuentra en situación de precariedad social y laboral absoluta.

Surge inevitablemente una posición pragmática, por parte de las bases así como por parte de sus dirigentes. Este pragmatismo parece ser más claro cuando se trata de demandas vinculadas con el bienestar social dirigidas a la Secretaría de Desarrollo Social, que cuando se trata de demandas vinculadas a la producción campesina mercantil dirigidas a la Secretaría de Agricultura.

Es por demás curioso constatar la existencia de una enorme confusión entre la voluntad explícita de las organizaciones y lo que viven efectivamente en la realidad. En tiempos pasados las organizaciones agrarias independientes se planteaban usar la lucha por la tierra como medio para alcanzar el socialismo, como bien rezaba el lema de una de ellas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala: “Hoy luchamos por la tierra, mañana por el poder”; sobreentendiendo, claro está, que se trataba del poder revolucionario. Actualmente, ninguna se plantea el socialismo como meta; sin embargo, su lucha por mantener la pequeña producción campesina, siempre y cuando sea consecuente, es en esencia antineoliberal.

La incapacidad de las organizaciones para influir en las políticas públicas, su “terciarización” y la inestabilidad de sus bases

Desde la reestructuración neoliberal, particularmente desde 1989 cuando se iniciaron las principales reformas al campo —como fueron la declaración del fin del reparto agrario y la nueva ley agraria, la privatización de las paraestatales, el achicamiento de la banca estatal, la firma del TLC, etc.— las organizaciones campesinas han perdido su capacidad de incidir en las políticas públicas y se sujetan a los programas

determinados por el gobierno. Además de la cerrazón de éste para escuchar sus demandas, como lo han señalado muchos autores, esta situación se debe sin duda a su debilidad propia en la medida en que la producción campesina fue brutalmente desplazada como productora para el mercado interno por la gran agricultura y controlada por el sector agroindustrial. El pequeño productor familiar dejó de ser un agente productivo relevante a nivel nacional; en particular dejó de ser importante para abastecer las grandes ciudades, aún si mantiene importancia en ciertas regiones en donde sigue siendo el modo de producción dominante, como en el sur-sureste del país. Otra explicación es, como lo vimos, la disminución del número de campesinos, simultáneamente con el impresionante crecimiento de los no campesinos, que se han transformado en parte de las bases de estas organizaciones.

Esta debilidad puede constatarse en muchos acontecimientos. Haciendo un balance de El Movimiento El Campo No Aguanta Más que ocupó las primeras planas de la prensa nacional en 2003, constatamos no solamente que se fraccionó varias veces hasta la fecha, sino que, a pesar del famoso Acuerdo Nacional para el Campo firmado por el propio gobierno, no se obtuvo ninguna de las reformas planteadas en el documento. Dos declaraciones recientes confirman este hecho. En diciembre 2006, durante la discusión del presupuesto que se debía dar al campo para el ejercicio fiscal 2007, un dirigente reconoció que con la “mentalidad morallera”, o sea de recibir dádivas, no habían logrado ningún cambio para el campo (*La Jornada*, 5-12-2006, p. 13). Unos meses más tarde, el 12 de julio pasado, en una reunión entre las organizaciones campesinas y las secretarías de Estado a cargo del campo para analizar el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno, un dirigente campesino reclamó que el proyecto gubernamental era favorable a los grandes productores sin tomar en cuenta a los pequeños, y otro reclamaba que las nuevas normativas impuestas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular eran ampliamente desfavorables a los pequeños ahorradores; el secretario de Agricultura les contestó con la más absoluta frialdad: “Nada puede seguir estático, se debe hacer una reflexión a fondo porque será un cambio doloroso, habrá golpeteo y choques fuertes pero se tienen que realizar esas modificaciones” (*La Jornada*, 13-07-2007, p. 46).

Frente a tal desencuentro e imposibilidad de modificar la correlación de fuerza con el gobierno, las organizaciones se limitan a aplicar los programas determinados por el gobierno a la manera de instituciones subcontratadas para ello. En la medida en que estos programas se dirigen a gru-

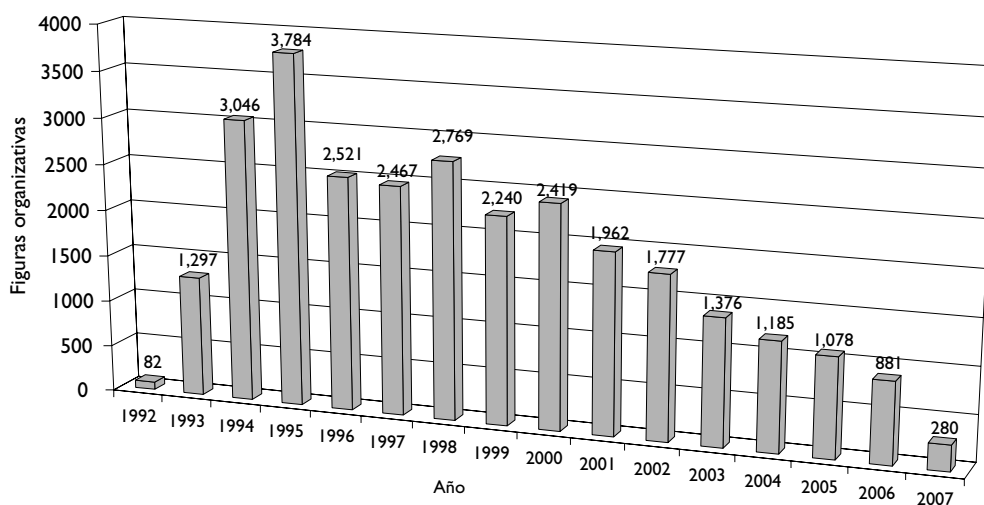
pos organizados, se ven obligadas a multiplicar la creación de asociaciones de productores sin cuidar la consolidación de su capacidad autogestiva. Crean múltiples figuras asociativas “ad-hoc” con tal de captar los recursos públicos. Sin embargo, este “boom organizacional” no es particular de las organizaciones sociales campesinas, sino que entran en la competencia otros agentes externos como son las iglesias, ONG, despachos que ofrecen sus servicios a los campesinos o pobladores rurales, incluso empresas privadas y paraфинancieras que crean sus propias figuras asociativas para integrar la producción campesina a su cadena productiva vía el control de la intermediación de los programas oficiales entre el gobierno y los productores (Martínez, 2006; Léonard y Kuhfuss, 2007)³. Sin olvidar el papel de los partidos políticos que buscan mantener el voto corporativo de los campesinos (Lutz y Herrera, 2007). Es forzoso reconocer que no todos estos agentes apoyan genuinamente los procesos de organización de los productores. En no pocos casos aprovechan su capacidad de intermediación para quedarse con parte de los apoyos que corresponden a los campesinos y disfrutar así de una jugosa renta pública, como lo demuestran Eric Léonard y Laure Kuhfuss (2007) en un estudio de caso sobre dos empresas privadas comercializadoras de maíz en el sur de Veracruz, que controlan los programas oficiales de apoyo a la modernización productiva, a la comercialización y al crédito en la región.

En el caso de las organizaciones campesinas podemos hablar de un proceso de “terciarización”, ya que éstas actúan como simples “terceros” para aplicar los programas definidos desde el gobierno o desde organismos internacionales. En el caso de los bufetes y de las empresas privadas, se puede hablar de la privatización de los programas gubernamentales (Martínez, 2006) o de la privatización de la intermediación entre el gobierno y los productores (Léonard y Kuhfuss, 2007). En ambos casos estamos frente a un proceso de subordinación de los agentes externos a los designios gubernamentales.

Los datos del Registro Agrario Nacional nos permiten medir este “boom” sin precedente en el número de figuras asociativas creadas a partir de 1992 (véase Gráfica 1).

³ Para el caso ecuatoriano, Luciano Martínez (2006, p. 128) concluye: “Esta aproximación al mundo organizacional rural muestra que la efervescencia organizativa ecuatoriana ha caminado en estrecha relación con la oferta de proyectos que vienen mayoritariamente de afuera. Hay una correlación entre crecimiento de OSG [organización de segundo grado] y crecimiento de la oferta de proyectos. En este sentido, el boom organizacional no tiene mucha sostenibilidad y corre el serio riesgo de ser instrumentalizado por los intereses de las agencias externas y, en especial, del Banco Mundial dentro de la política del post Consenso de Washington.”

Gráfica I
Constitución de figuras organizativas



En 1991 había 5,695 asociaciones de productores registradas (4,510 organizaciones de primer nivel y 1,185 organizaciones de segundo nivel) y habilitadas para participar en los programas gubernamentales de fomento a la producción, mientras en 2007 eran 34,839 (33,400 y 1,439 respectivamente) (cuadro 3). Los estados en donde se crearon la mayor cantidad de figuras asociativas desde 1992 son: Oaxaca con 4,348; Chiapas con 3,771; Veracruz con 3,248; Sinaloa con 1,739; Sonora con 1,680; Yucatán con 1,486; Puebla con 1,477; Campeche con 1,243; Hidalgo con 1,000; Tabasco con 928; Morelos con 879; Estado de México con 816; Durango con 796; San Luis Potosí con 788; Guerrero con 724. Destacan los estados campesinos e indígenas junto con dos estados de alta productividad (Sinaloa y Sonora).

Es notorio que se dispara el número de organizaciones de primer nivel, mientras que las de segundo nivel aumentan poco. Esto se debe en buena medida a que la mayoría de las figuras asociativas de primer nivel son pequeñas asociaciones de productores aisladas que no pertenecen a niveles superiores de organización y es probable que no pertenezcan a ninguna organización, campesina. En suma, el incremento de las figuras asociativas fue una necesidad para que los campesinos pudiesen recibir los apoyos otorgados por los numerosos programas focalizados del gobierno, pero lejos de reflejar el fortalecimiento de los procesos de organización de los productores gracias a la creación de capital humano y organizativo, refleja una gran dispersión y aislamiento de los productores así como su dependencia de agentes externos. Muchas de ellas tienen escasa capacidad empresarial, su sobrevivencia depende tanto de su relación clientelar con estos agentes externos como del “goteo” de los subsidios hacia el campo⁴.

Cuadro 3

Figuras asociativas	1991	2007
<i>Primer nivel:</i>	4,510	33,400
Sociedades de Solidaridad Social (SSS)	2,927	21,957
Sociedades de producción rural (SPR)	1,583	11,376
Sociedades mercantiles	0	66
Sociedades civiles	0	1
<i>Segundo nivel:</i>	1,185	1,439
Federación de SSS	2	40
Unión de SPR	31	63
Unión de ejidos y/o comunidades	1,034	1,149
Asociación rural de interés colectivo	118	187
<i>Total</i>	5,695	34,839

Fuente: Registro Agrario Nacional.

⁴ En el mismo estudio Luciano Martínez (*ibid*) plantea: “Este trabajo muestra también que hay que ser muy cautos en el establecimiento de la igualdad entre organización campesina y capital social. La visión utópica de que detrás de cada organización existe capital social parte de una concepción utilitarista de este concepto, antes que de una de corte relacional. Lo que se observa es más bien una situación de crisis de relaciones solidarias en las bases del mundo rural, y nada permite sacar conclusiones mecánicas sobre la existencia de capital social en todas las OSG.” (p. 128).

La otra consecuencia de este pragmatismo es la inestabilidad de las bases. En la medida en que no hay un vínculo ideológico fuerte con la organización, la gente participa o deja de participar en función de la resolución de sus problemas inmediatos. Esta falta de compromiso puede ir más allá de un simple entrar y salir en la organización para llegar a ser un ir y venir entre diferentes organizaciones, ONG o despachos de agrónomos, según los programas que ofrecen.

El paso del trabajo a nivel local inherente a la lucha agraria, al trabajo a nivel nacional e internacional inherente a la globalización

La profesionalización de los cuadros de las organizaciones sociales y la burocratización de sus estructuras es un problema que ha sido planteado hace mucho tiempo (Michels, 1969). Existen ciertos contextos que obligan a mantener fuertes vínculos como condición de sobrevivencia de la organización misma. Este era el caso de la lucha por la tierra, ya que era por definición una lucha eminentemente local que suponía fuertes niveles de participación. Mantener estrechos vínculos entre la organización y los demandantes de tierra era una condición *sine qua non* para mantener los niveles de acción y movilización (tomas de tierra) necesarios para lograr la resolución positiva de su demanda. Sin embargo, existen otras situaciones que favorecen estos procesos de profesionalización y que acaban por provocar cierto distanciamiento entre la organización y sus bases.

Con el paso a la organización económica para la producción y la globalización de las relaciones económicas, la lucha adquirió una clara dimensión nacional e incluso internacional. Hoy los problemas de los campesinos no dependen de su relación de poder con el terrateniente o la burguesía local como en el caso de la lucha por la tierra, sino esencialmente de su capacidad de intervenir en la esfera gubernamental, tanto en las instituciones del Ejecutivo (Secretaría de Agricultura, Secretaría de Comercio, Secretaría de Hacienda, etc.) como en el legislativo, muy particularmente al final de cada año cuando se acuerda en la Cámara de Diputados el presupuesto federal que se ejercerá el siguiente año, o cada vez que se analiza el proyecto de alguna ley que pueda afectar sus intereses. Pero más aún, depende de su capacidad de interferir en los organismos internacionales que definen las relaciones económicas y comerciales mundiales como

la OMC, el Banco Mundial, la OIT, la FAO y sus numerosos comités de trabajo por producto, o cualquier organismo internacional del sector productivo como la Organización Internacional del Café (OIC). Hay que reconocer que la complejidad de los asuntos a tratar para lograr políticas públicas vinculadas con acuerdos comerciales internacionales favorables a los campesinos, es enorme, y que el negociar con profesionistas de nivel internacional apela a capacidades de muy alto nivel profesional que los dirigentes sociales deben adquirir a menudo “sobre la marcha”.

Este proceso llevó a las organizaciones a globalizarse, o sea a establecer vínculos de trabajo entre ellas a nivel internacional. En México, y parece que en América Latina en general, la creación de los frentes nacionales fueron propios de las décadas de los setenta y ochenta, mientras las siguientes fueron propias de la creación de frentes internacionales: Vía Campesina en 1993 con organizaciones de 56 países afiliadas, y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, creada a principios de este siglo y que reagrupa a organizaciones de 15 países de América Latina. Este mismo proceso se dio desde hace mayor tiempo en Europa con la creación de la Coordinadora Campesina Europea que en 1986 que fue punta de lanza para la creación de Vía Campesina.

Se agudiza entonces una vieja disyuntiva en las organizaciones, planteada hace cerca de un siglo por Robert Michels: el de la inevitable formación de oligarquías y la burocratización de las organizaciones, lo que provoca su alejamiento de sus bases. Esto es lo que está pasando actualmente con las organizaciones sociales campesinas: por darle primacía al trabajo a nivel cupular nacional e internacional, se suele descuidar el trabajo de organización a nivel local, y las organizaciones se parecen más a agencias que hacen lobby en las instituciones gubernamentales, que a organizaciones sociales que se dedican a fortalecer los procesos organizativos de sus bases. Así, para las organizaciones de los productores la acción local se desdibuja en la medida en que sus cuadros se ven obligados a negociar permanentemente por políticas públicas favorables a la pequeña producción en el nivel nacional e internacional. En este contexto el trabajo local suele descuidarse y surge una disociación entre una posición “pragmática-desarrollista” a nivel local y otra política a nivel global⁵.

⁵ Luciano Martínez (*ibid*) dice que “se podría perfectamente plantear la hipótesis de que la dinámica organizacional del medio rural estaba desconectada de la dirigencia del movimiento indígena, en otras pala-

Conclusiones

En la última década disminuye notablemente el número de hogares campesinos, mientras que se multiplica por 2.7 el número de hogares no campesinos. Los ingresos agrícolas de los hogares campesinos pasan de representar el 41% de sus ingresos totales a sólo 27%. Así, no sólo los ingresos en el campo provienen masivamente del trabajo asalariado por parte de los hogares no campesinos, sino que también la pluriactividad campesina se incrementa. Estos datos no obligan a repensar lo que se entiende por economía campesina, pero por lo pronto queda obvio que las bases de las organizaciones sociales llamadas “campesinas” son en gran medida bases rurales no campesinas que no tienen nada que ver con la agricultura, y se organizan como pobladores para mejorar su nivel de bienestar.

En el marco de la transición política, debido a su debilidad por negociar con sus propias fuerzas, las organizaciones sociales se supeditan a los intereses de los partidos políticos. Esta subordinación de lo social a lo político introduce mucha confusión en la relación que debe existir entre ambas instituciones. Al respecto parece que se fortalecen dos tendencias: la que plantea la idea del partido-instrumento, o sea que quiere que el partido esté directamente al servicio de las organizaciones sociales, y la que se opone a la lucha electoral como vía de transformación de la sociedad. Esta última tendencia está claramente representada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la “otra campaña”. El neocorporativismo por un lado y el rechazo al ejercicio de la democracia electoral por el otro son los polos que marcan la evolución de la democracia mexicana en el campo.

La pobreza generalizada junto con un sistema político aún deficiente, es un terreno fértil para que se desarrolle un gran pragmatismo entre los ciudadanos, porque se ven agobiados por la marginación y las dificultades de tener acceso a mercados de trabajo lejanos y de gran precariedad. Esta situación de marginación y precariedad social limita las posibilidades de participar en el juego político nacional y desdibuja la noción misma de ciudadanía. Esto nos remite al viejo problema de la relación existente entre democracia y desarrollo. Creemos que efectivamente la falta

bras, que existían dos andariveles por los cuales marchaban las organizaciones de segundo grado y las nacionales: uno, desarrollista, a través de la implementación de proyectos por parte de las primeras, y otro, más político, impulsado por las segundas...” (p. 118).

de desarrollo impone ciertas contingencias a la democracia electoral, por lo cual los países en desarrollo no pueden seguir las sendas de los modelos democráticos de los países avanzados, sino que deben inventar su propio modelo de democracia participativa.

Es por su debilidad propia que las organizaciones sociales en el campo no logran influir en la toma de decisión acerca de las políticas públicas. Por eso se ven reducidas a jugar el papel de ejecutores de las decisiones tomadas por el Ejecutivo. Si no lo hacen, se ven desplazadas por el trabajo de otros agentes externos, en particular por los numerosos bufetes que trabajan para el gobierno federal o los gobiernos estatales. Han perdido capacidad de marcar su propio rumbo de acuerdo a sus planteamientos programáticos⁷.

Finalmente, la globalización propició la profesionalización de los cuadros de las organizaciones, la burocratización de sus aparatos y su alejamiento de sus bases. Se transformaron en instituciones con cierta capacidad para intervenir en la esfera nacional e internacional pero con gran debilidad a nivel local. Así las organizaciones aparentemente se fortalecen, pero más bien son los líderes los que adquieren mayor poder mientras sus bases se debilitan en la medida en que no se construyen organizaciones productivas sólidas capaces de ofrecer una alternativa productiva viable para la sociedad. De no remediarse esta contradicción, la economía campesina no tiene visos de salir de la crisis.

Estos son algunos de los retos que enfrentan las organizaciones sociales en el campo mexicano si quieren lograr el objetivo que es su razón de ser: fortalecer la pequeña producción familiar campesina para lograr mayor equidad económica y sustentabilidad ecológica.

⁷ En otro texto escribimos: “Esta oferta [gubernamental] ha provocado un nuevo pragmatismo empresarial entre las ONG y las propias organizaciones sociales, por la búsqueda oportunista de financiamiento visto como subsidio que lleva a la fragmentación de las organizaciones sociales, al menor involucramiento y a la mayor delegación de la representación (por falta de interés) en la lucha social y política. Sobradas razones permiten entender esta situación, pero sus efectos negativos sobre las organizaciones sociales no son por ello menos fuertes... Aquellos dirigentes que, para justificar esta situación, afirman que el «desarrollo es primero que la democracia», caen en un pragmatismo que les impide participar en proyectos consolidados. Ahí la disyuntiva parece ser la de adaptarse a la oferta con tal de solventar puntualmente problemas graves (hambre, educación, salud, ecología, etcétera), o lograr ir más allá de eso para consolidar el tejido social. Hay que reconocer que la línea divisoria entre ambas acciones es endeble...” (C. de Grammont, 2006, p. 20).